



COMITÉ PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

Acta relativa a la Sesión No. CT/SE/23/2022

En Mexicali, Baja California, siendo las trece horas del día veinte de abril de dos mil veintidós, se reunieron en la sala de sesiones del Consejo de la Judicatura del Estado, los integrantes del Comité para la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, el Magistrado Nelson Alonso Kim Salas, el Consejero de la Judicatura, Lic. Francisco Javier Mercado Flores, la Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura, C.P. Rosaura Zamora Robles, el Director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna del Poder Judicial, Lic. Santiago Romero Osorio y la Directora de la Unidad de Transparencia, Maestra en Derecho Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Secretaria Técnica del Comité, para celebrar la sesión extraordinaria CT/SE/23/2022.

La Secretaria Técnica del Comité da cuenta con la lista de asistencia de todos los integrantes del Comité, al Magistrado Presidente, quien declara la existencia de quórum legal, por lo cual se inicia esta sesión conforme a los artículos 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 39 y 42 del Reglamento de la Ley citada. Acto continuo, sometió a sus integrantes el orden del día en los siguientes términos:

ORDEN DEL DÍA

- I. **Aprobación del orden del día.**
Por unanimidad se aprobó en sus términos.
- II. **Asuntos a tratar:**

ÚNICO. Procedimiento de clasificación de la información y autorización de versiones públicas número 11/2022, derivado del realizado por la Titular de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Baja California, relativo a las solicitudes de información registradas con los números de folio 020058422000111 y 020058422000155, en la Plataforma Nacional de Transparencia el día 16 de marzo y el 06 de abril, ambos de dos mil veintidós.

Visto el proyecto de resolución presentado por la Secretaria Técnica, el Presidente lo somete a consideración de los integrantes del Comité, quienes con las facultades que se le confieren en las fracciones I y II del artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 11 y 13 fracción XIII del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California, aprobaron por unanimidad de votos, por sus propios y legales fundamentos, la resolución relativa a la clasificación de la información de carácter confidencial, realizada por la Contralora del Poder Judicial del Estado de Baja California, quedando en consecuencia, autorizadas las versiones públicas correspondientes, CONSIDERANDO QUE:

1) Antecedentes:

1.1) En las solicitudes registradas con los números de folio 020058422000111 y 020058422000155, se pide la versión pública de los expedientes que contengan la totalidad de documentos en donde se hayan hecho constar todos los procesos públicos de entrega y recepción acontecidos desde 2017 y hasta el día 02 de febrero de 2022, en los Juzgados Cuarto, Quinto, Sexto y Décimo Primero Civil de Tijuana, Baja California, así como los acontecidos en el Juzgado Primero Familiar en dicho período.

1.2) Realizado el requerimiento de información mediante oficios girados por la Unidad de Transparencia números 396/UT/2022, de fecha 16 de marzo de este año y 0561/UT/2022, del 07 de abril del año en curso, la Titular de la Contraloría de este Sujeto Obligado, por oficio CONTR/164/2022, de fecha de recibido el día 22 de marzo

pasado, solicitó la ampliación del plazo para otorgar respuesta con respecto de la primera de las solicitudes mencionadas, lo que le fue concedido por hasta diez días hábiles adicionales, por acuerdo tomado por este Comité, en la sesión extraordinaria número CT/SE/15/2022, celebrada el día 23 de ese mismo mes.

Posteriormente, mediante oficio número CONTR/197/2022, recibido en la Unidad de Transparencia el día 07 de este mes de abril, la autoridad competente remite 8 versiones públicas de las actas de entrega-recepción de los asuntos y recursos públicos que se encontraron en los archivos de Contraloría del Poder Judicial del Estado, relativos a los Juzgados Cuarto, Quinto, Sexto y Décimo Primero de Primera Instancia Civil y Primero Familiar, todos del Partido Judicial de Tijuana, Baja California.

Igualmente, por oficio número CONTR-205/2022 del día de hoy, la servidora pública citada, manifestó que a efectos de dar cumplimiento a la solicitud registrada con el folio 020058422000155, cuyas peticiones son idénticas a la registrada con el número de folio 020058422000111, pone a disposición las versiones públicas que se obsequiaron a la peticionaria, en esta última solicitud, para dar respuesta a la primera de las mencionadas.

1.3) La Unidad de Transparencia verificó si la supresión de los datos personales se realizó de acuerdo a la normatividad aplicable y hecho que fue lo anterior, se turnó al Comité de Transparencia, para su análisis.

2) **De la clasificación de la información y versiones públicas elaboradas.** Los integrantes del Comité, atendiendo a los artículos 175 y 177 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, por tratarse de solicitudes en las que se ve involucrada información confidencial, procedieron a determinar si los datos suprimidos en los documentos que se analizan, son o no confidenciales, aplicando la prueba de daño a que se refiere el artículo 109 de la Ley local de transparencia y acceso a la información pública, lo que se hizo tomando en cuenta que en principio, toda información generada, administrada, adquirida o en

posesión de Poder Judicial, por virtud del ejercicio de sus competencias, funciones y atribuciones, es pública, con las salvedades establecidas en la propia Ley, y que **la versión pública de documentos y resoluciones, permite la consulta de todo interesado en la actuación de los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, pues se elaboran suprimiendo la información considerada confidencial o reservada, lo que requiere como acto conjunto a su elaboración, emitir un criterio que la clasifique como restringida al público, lo que exige además, la exposición de los motivos que la justifiquen al aplicar la prueba de daño.**

Lo anterior expuesto implica por una parte, **precisar la normatividad que expresamente le otorga el carácter de confidencial a la información omitida y por otra, determinar si con su difusión se causaría un serio perjuicio al interés o intereses públicos tutelados; es decir, la existencia de una expectativa razonable de daño presente, probable o específico, a lo que la doctrina ha denominado la prueba de daño.**

2.1) **Del acto de clasificación de la información.** El artículo 106 de la Ley en cita, indica que la clasificación es un proceso mediante el cual, el sujeto obligado determina que la información en su poder encuadra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad.

En los casos concretos que nos ocupan, para efectos del acto de clasificación, encontramos como elementos objetivos, los siguientes:

2.1.1) **En las versiones públicas de mérito, se omitieron los datos personales que contenían, en observancia al marco normativo que rige en la materia, esto es, a lo establecido en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4, fracciones VI, y XII, 106, 107, 109 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 4 fracciones III, VI, IX, 10 fracciones IX y XVIII, 55, 73, 77, 82, 87 y relativos del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California.**

2.1.2) De los propios documentos en estudio, se desprende que **no existe consentimiento expreso** otorgado por **los titulares de los datos personales suprimidos**; es decir, de los servidores públicos intervinientes en los procedimientos de entrega-recepción, consentimiento que resulta necesario **para que dichos datos puedan ser comunicados a terceros**, como se establece en el diverso numeral 176 del Reglamento de la Ley local de la materia, motivo por el cual solo podrán tener acceso a ellos, sus titulares, sus representantes y los servidores públicos facultados, como se dispone en el precepto normativo 171 del Reglamento indicado.

2.1.3) En virtud de lo expuesto y como consecuencia de la aplicación de la normativa reseñada, en la elaboración de las versiones públicas de que se trata, **se suprimieron los datos personales consistentes en los domicilios particulares, los números de la credencial para votar y la copia de las identificaciones oficiales expedidas por el Instituto Nacional Electoral, el número de licencia de conducir y la copia de tal documento, tanto de dichos funcionarios como de quienes fungieron como testigos en las actas levantadas, circunstancia que se justifica atendiendo la obligación legalmente establecida de proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, dispuesta por la Ley estatal de la materia, en el artículo 16, fracción VI, considerando que es innegable, que la divulgación de los datos suprimidos representa un perjuicio real y significativo para sus titulares y del interés público de tutelar la vida privada y la intimidad de éstos, ya que se trata de información que no es de interés general; es decir, los datos omitidos en las versiones públicas de las actas de entrega-recepción de los asuntos y recursos públicos que se encontraron en los archivos de Contraloría del Poder Judicial del Estado, relativos a los Juzgados Cuarto, Quinto, Sexto y Décimo Primero de Primera Instancia Civil y Primero Familiar, todos del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, lo que es acorde a lo establecidos en la fracción VIII del artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, pues por ellos debe entenderse cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, **información de carácter confidencial**, acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja**

California, la que en su artículo 4, fracción XII, establece que se entenderá por información confidencial: ***“La información en posesión de los sujetos obligados que refiera a datos personales; (...) por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos que así lo contemple la Ley General o la presente Ley”***, lo que se complementa con lo dispuesto en el precepto normativo 172, del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que a la letra reza: ***“Se consideran datos personales, de manera enunciativa más no limitativa: la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable, tales como el nombre, número telefónico, edad, sexo, registro federal de contribuyentes, clave única de registro de población, estado civil, domicilio, dirección de correo electrónico, origen racial o étnico, lugar y fecha de nacimiento, lugar de origen y nacionalidad, ideología, creencias o convicción religiosas, filosófica, política o de otro género; los referidos a las características físicas, morales o emocionales, preferencias sexuales, vida afectiva o familiar, o cualquier otro referente al estado de salud físico o mental, datos laborales, idioma o lengua, escolaridad, (...) ingresos, patrimonio, títulos, certificados, cédula profesional, (...) huellas dactilares, firma autógrafa (...) etcétera”***.

2.1.4) De la prueba de daño. Atendiendo a los diversos numerales 175 y 177 del Reglamento de la Ley estatal de la materia y considerando que la clasificación se hace como ya quedó dicho, con motivo de la recepción de una solicitud de acceso a la información pública del Poder Judicial del Estado, se procede a la exposición de los motivos que la justifiquen, mediante la aplicación de la prueba de daño, de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley estatal, en la Ley General de Transparencia, el Reglamento de la Ley local y los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia y demás disposiciones aplicables.

En primer lugar, resulta pertinente citar el artículo Segundo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que indica que **se entenderá por “Prueba de daño: la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla”.**

Así las cosas y, dada la obligación de demostrar de manera fundada y motivada, que la divulgación de información lesiona un bien jurídico tutelado por tratarse de información concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable y que el daño que puede producirse con su publicidad, es mayor que el interés de conocerla, **se determina que al tratarse de datos personales de carácter confidencial protegidos por la Ley y que no se cuenta con la autorización del titular de los mismos, para su entrega o divulgación, los datos que se omiten deben clasificarse como confidenciales y restringir su acceso.**

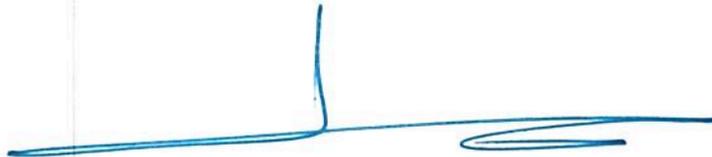
Efectivamente, con la aplicación de la prueba de daño, como sujeto obligado se debe justificar conforme al artículo 109 de la Ley de transparencia estatal, que: I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o de la seguridad nacional. A este respecto cabe decir que **liberar la información cuya titularidad corresponde al ámbito privado de los servidores públicos que intervienen en los procedimientos administrativos de entrega-recepción, representa un riesgo real de injerencia de toda índole en sus vidas privadas, no autorizada, de ahí que no pueda otorgarse la información, privilegiando su derecho a la intimidad;** II. El riesgo o perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público general de que se difunda. Del análisis del punto anterior, se advierte que **el daño que se pudiese causar a los servidores públicos que participaron en los procedimientos de entrega-recepción al divulgar sus datos personales, supera el interés público de que se conozcan, pues no se puede suponer ningún interés público que amerite su divulgación, por lo que la clasificación de confidencialidad debe persistir, pues se reitera, que no se cuenta con el consentimiento necesario de dichos servidores públicos para la**

liberación de sus datos; III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. En este caso concreto, la limitación al derecho de acceso a la información es proporcional a la protección de la intimidad de los servidores públicos, respecto de aquellos datos que corresponden a su esfera personal y es el único medio para evitar el perjuicio, pues frente al marco constitucional vigente, en términos del artículo 1^{ro} de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad debe dar igual tratamiento a ambos, en la protección de los derechos fundamentales, es decir, tanto del solicitante de la información como de los sujetos de quienes se deben proteger sus datos personales.

3) De la aprobación del acto de clasificación y autorización de las versiones públicas elaboradas. En virtud de lo fundado y motivado en los apartados anteriores, el Magistrado Presidente, somete a la consideración de los integrantes del Comité el proyecto presentado y por unanimidad **ACUERDAN: Aprobar la clasificación de la información de datos personales como confidenciales relativos a domicilios particulares, los números de la credencial para votar y la copia de las identificaciones oficiales expedidas por el Instituto Nacional Electoral, el número de licencia de conducir y la copia de tal documento, de los servidores públicos del Poder Judicial que participan en los procedimientos administrativos de entrega-recepción realizados por la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Baja California, incluyendo a quienes fungen como testigos en las actas levantadas; autorizándose en consecuencia, las versiones públicas correspondientes, por las razones y fundamentos indicados con antelación.**

Notifíquese y entréguese copia de esta acta a la peticionaria de las solicitudes registradas con los números de folio 020058422000111 y 020058422000155, por conducto de la Unidad de Transparencia, anexando con la copia de la respuesta las versiones públicas solicitadas. Igualmente, deberá notificarse vía correo electrónico, por conducto de la Unidad de Transparencia, a la **Titular de la Contraloría del Poder Judicial del Estado**, el resultado del procedimiento de clasificación de la información realizada y la autorización de las versiones públicas elaboradas por la citada servidora pública.

Sin otro asunto que tratar, se cierra esta sesión, siendo las trece horas con treinta minutos del día veinte de abril de dos mil veintidós.



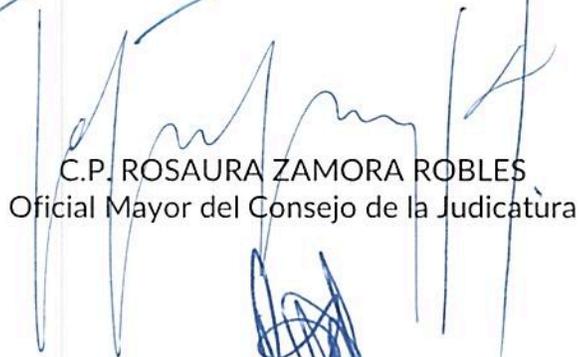
MAGISTRADO ALEJANDRO ISAAC FRAGOZO LÓPEZ
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado



MAGISTRADO NELSON ALONSO KIM SALAS
Adscrito a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia



LIC. FRANCISCO JAVIER MERCADO FLORES
Consejero de la Judicatura del Estado



C.P. ROSAURA ZAMORA ROBLES
Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura



LIC. SANTIAGO ROMERO OSORIO
Director de la Unidad Jurídica y Asesoría Interna

M.D. ELSA AMALIA KULJACHA LERMA
Secretaria Técnica del Comité

Firma electrónica con fundamento en los artículos 1 fracciones I y II, 2, 3 fracciones I, II, XIX, XX, XXV y XXX, 4 fracciones I y II, 12 y 13, del Reglamento para el Uso del Expediente Electrónico y la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial del Estado de Baja California



PODER JUDICIAL
DE BAJA CALIFORNIA

Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de Baja California

Hoja de Evidencias Criptográficas

Archivo Firmado: F33_0140163.pdf

Proceso de Firma: 3834330

Autoridad Certificadora: AC del Poder Judicial del Estado de Baja California

Nombre:	ELSA AMALIA KULJACHA LERMA	Serie:	000000000000000007260
Fecha y Hora:	2022-04-20T13:25:27-07:00	Secuencia:	10766225
<pre> 11 af a4 61 7e 62 53 79 d3 67 96 39 94 6f 49 5b 06 3b 2e 7d f1 41 36 9d 72 ed ed 39 19 65 f2 d5 f8 b5 34 69 62 dc 61 37 d3 de e2 46 7b 0b 8d 46 bf 73 7d e7 65 5d 47 43 00 a9 f9 8d 45 f3 8a 5c fd e7 60 26 b2 40 aa 57 fb cc 45 31 f7 fc 64 88 f6 21 b0 b6 10 08 4b be 19 99 e5 5d 2b ee 97 85 39 31 b1 99 a7 ff 0f 00 8d 0c 0a 1d 0e 99 fc 4c 79 cb 77 d5 4e 0e fd 53 a8 47 5b 25 e9 1d 14 26 d2 96 64 3d 27 3f db 7e 0c 09 b3 6d cf fc 65 e2 99 6b dd 81 b6 c1 c1 60 58 3d 8a 60 9a 2c 9a 63 de fd 5a b3 d1 2e 72 e2 05 1d 8e 50 b3 7b cb 75 25 d4 99 e5 0a 52 7d 05 67 88 e9 fa 83 32 83 b7 46 86 52 d6 36 7e 69 54 1d 42 26 b7 31 53 d8 f8 4a f6 15 32 f2 6c 3d f5 b6 b5 e3 50 bd 33 29 10 36 e2 8b bd 18 38 a5 e9 e1 ea 65 38 65 92 3e dd 5a f7 18 1b 72 77 07 ad 93 3d 0c e1 dd ed c3 e6 </pre>			
Datos estampillados:	3D744E9C6CE4A518F135BF9EEAA1A5A1C41D69E90019BB56DDF1C6B6B510CBEF		



FIRMADO POR:
- ELSA AMALIA KULJACHA LERMA
PROCESO DE FIRMA: 3834330

La validez de este documento puede ser verificada en la siguiente página

<https://tribunalelectronico.pjbc.gob.mx/Firma/validacion>

3D744E9C6CE4A518F135BF9EEAA1A5A1C41D69E90019BB56DDF1C6B6B510CBEF